

DCINT 146/2021

[Dir Contencioso Int en mat DH<dcint@mrecic.gov.ar>](mailto:dcint@mrecic.gov.ar)

jue 19/08/2021 15:47

Para:Tramite <Tramite@corteidh.or.cr>;

3 archivos adjuntos (829 KB)

Entrada-19ago21-gde-sdh-NO-2021-76118754-APN-DNAJIMDDHH%MJ-Mendoza y otros.pdf; Salida-19ago2021-ERICA-Nota Verbal para Nota Simple-Nota DCINT 146.2021-Mendoza y otros.pdf; Salida-19ago2021-Corte IDH-Nota Simple-Nota DCINT 146.2021-Mendoza y otros.pdf;

Se remite como archivo adjunto Nota DCINT 146/2021 dirigida a la Sra. Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Elizabeth Odio Benito-, en relación con el Caso CDH-12.651- Mendoza y otros vs. Argentina- del registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A su vez, se envía a la Embajada de la República Argentina en Costa Rica con el mero efecto de su conocimiento.

DCINT

--

DCINT

Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Esmeralda 1212, piso 10, oficina 1008
C1007ABR, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (+05411) 4819-7000 internos 3016/7974/3408



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Nota

Número:

Referencia: Caso “Mendoza y otros vs. Argentina” del registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

De mi mayor consideración:

SEÑOR DIRECTOR DE CONTENCIOSO INTERNACIONAL

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

A. JAVIER SALGADO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del Caso “Mendoza y otros vs. Argentina” del registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH”) y con relación a su Nota NO-2021-66305919-APN-DCIMD#MRE mediante la cual se transmitiera la comunicación CDH-12.651/383 de la Corte IDH del 21 de julio de 2021.

En esa oportunidad, la Corte IDH solicitó al Estado que “...a más tardar el 19 de agosto de 2021, presente información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de la garantía de no repetición ordenada en el punto resolutive 22 de la Sentencia, relativa al deber del Estado de “adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en la [misma,] sobre el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior”.

En particular, se pidió al Estado:

“a) Se refiera específicamente a las observaciones y objeciones al cumplimiento de esta medida, efectuadas por la representante de las víctimas durante la audiencia de octubre de 2020 y en su escrito de observaciones de noviembre de 2020;

b) información sobre la aprobación del nuevo Código Procesal Penal Federal y cuáles de los artículos de dicho cuerpo normativo pretenden dar cumplimiento al derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, en los términos ordenados en la Sentencia;

c) información específica sobre la vigencia de ese Código, particularmente cuándo entrarán plenamente en vigencia, en el territorio nacional, todos los artículos que pretenden garantizar dicho derecho, y

d) la remisión de una copia íntegra del nuevo Código Procesal Penal Federal”

I. Sobre el estado de implementación del punto resolutive 22 de la sentencia.

En primer lugar, debe indicarse que el texto completo del Código Procesal Penal Federal se encuentra disponible en el siguiente link: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319681/norma.htm>

A la vez, corresponde informar que para dar acabada respuesta a lo solicitado por el tribunal regional, y teniendo en cuenta las observaciones de la representación de las víctimas, esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió información actualizada a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal (en adelante "Comisión Bicameral") [1]. Se acompaña entonces como anexo, un informe del 13 de agosto de 2021 en el que la Comisión Bicameral detalla el estado de implementación del Código Procesal sancionado mediante la ley n° 27.063 (texto ordenado 2019), con eje en la normativa específicamente vinculada con la implementación del punto resolutive 22 de la sentencia de esta Corte IDH.

Tal como se detalla en el documento adjunto, la Comisión Bicameral ha dictado las Resoluciones n° 2/2019 del 13 de noviembre de 2019, n° 1/2020 del 24 de noviembre de 2020 y n° 1/2021 del 3 de febrero de 2021[2].

Por otra parte y en función de las consideraciones efectuadas por la Defensoría General de la Nación en su presentación del 20 de noviembre de 2020 sobre las sentencias de la Honorable Corte IDH en los casos “Gorigoitía vs. Argentina” y “Valle Ambrosio y otro vs. Argentina”, vale mencionar que tal como se ha informado en los expedientes respectivos, se han producido avances sustanciales en la ejecución de la manda del máximo tribunal regional en materia de derechos humanos.

Así las cosas, se destaca que en el marco del caso “*Valle Ambrosio y otro vs. Argentina*”, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley n° 10749, que fue publicada en el Boletín Oficial provincial del día 21 de abril de 2021. A través de dicha norma se dispuso la modificación del articulado del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, con el objeto de regular el acceso al recurso de casación en línea con los estándares internacionales en la materia. Teniendo en cuenta que el representante de las víctimas manifestó su beneplácito con la reforma normativa, el Estado argentino ya solicitó en dicho caso que la Corte IDH considere cumplido el punto resolutive 4 de la sentencia dicatada el 20 de julio de 2020.

A la vez, en el marco del caso “*Gorigoitía vs. Argentina*”, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza dictó la Acordada N° 28.677, a través de la cual se comprometió a remitir a la Legislatura provincial un proyecto de ley con las reformas procesales necesarias para asegurar el derecho a la revisión integral en los términos del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta propuesta legislativa está en trámite en la Legislatura de la Provincia de Mendoza.

II. Palabras finales

La información aquí aportada y en particular, el documento que obra en anexo, da respuesta al requerimiento de la Honorable Corte sobre el estado de implementación del punto resolutive 22 de su sentencia del 14 de mayo de 2013.

Desde ya, mantendremos periódicamente informado al tribunal regional sobre los avances en el marco de este trámite internacional.

[1] La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal fue creada por la ley n° 27.482 en el ámbito del Congreso de la Nación “con el fin de evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la implementación prevista en el artículo 3°, los respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del Código aprobado por el artículo 1° de la presente ley, así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”.

[2] Disponibles en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/331847/norma.htm>; <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344835/norma.htm> ; <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346923/norma.htm>

Sin otro particular saluda atte.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2021

A LA DIRECTORA NACIONAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
Gabriela Laura KLETZEL
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de dar respuesta a la información peticionada en la nota IF-2021-67538326-APN-DNAJIMDDHH#MJ dirigida a la Presidenta de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal (“CBCPPF”), en mi carácter de director de la secretaría técnica de la mentada Comisión.

En primer término, deseo replicar el compromiso ya expresado en anteriores misivas por la presidencia de la CBCPPF a los fines de contribuir, en el marco de sus atribuciones, a que los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”) sean plenamente operativos en el sistema federal de administración de justicia, así como en el seno de las agencias judiciales de la Justicia Nacional Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aún dependen del Estado Nacional.

En segundo término, y en relación a la información solicitada, a continuación se realiza un breve contexto de la aprobación del Código Procesal Penal Federal (“CPPF”), de su implementación territorial y normativa, así como de las acciones y decisiones de la CBCPPF plasmadas en sus respectivas resoluciones.

a) Antecedentes sobre la aprobación del Código Procesal Penal Federal y normativas asociadas

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación –cuya denominación fuera luego rectificadora, tras la introducción de modificaciones, mediante la ley nacional nro. 27.482 como “Código Procesal Penal Federal”– fue sancionado en diciembre de 2014 por ley nacional nro. 27.063.

Dicho instrumento normativo, en lo esencial, diseña un proceso penal que deja atrás una matriz semi inquisitiva para imponer una de carácter adversarial.

El art. 3 de la ley nacional nro. 27.063 menciona que *“el Código aprobado (...) entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”*, mientras que el art. 7 – luego modificado mediante ley nro. 27482- especifica la creación de la CBCPPF en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación *“con el fin de evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la implementación prevista en el artículo 3º, los respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del Código aprobado por el artículo 1º de la presente ley, así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”*.

Seguidamente a su sanción, en junio de 2015 se aprobaron las Leyes nacionales nro. 27.146 de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal y nro. 27.150 de Implementación del Código Procesal Penal, las que prevén la creación y readecuación de los distintos organismos necesarios para la puesta en marcha del naciente paradigma. La ley nro. 27.150, a la vez, establece en su artículo primero que *“el CPPF aprobado por ley 27.063 se implementará en forma progresiva, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”*.

En este sentido, asumiendo la complejidad de la readecuación del todo el sistema federal de administración de justicia penal, se optó por el mismo modelo de progresividad para la implementación del nuevo Código que fue utilizado por las administraciones provinciales para abordar transformaciones de este talante, y que también ha sido utilizado por otros países latinoamericanos que han enfrentado procesos similares tales como Panamá, Colombia o Chile. Ello, en tanto resulta imposible lograr de un día para otro que el contenido de la nueva norma procesal se materialice tanto en la práctica como en las reformadas organizaciones destinadas a ponerlo en funcionamiento.

En adición, el artículo segundo de la ley nro. 27.150 estableció que el nuevo Código de forma entraría en vigencia en la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1 de marzo de 2016 y en el ámbito de la Justicia Federal *“de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación”*.

Asimismo, el Capítulo II de la citada legislación dotó de distintas funciones a la CBCPPF, entre las que figuran *“establecer un cronograma para la*

implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en los Distritos de la Justicia Federal”; “*coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales*” y “*diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en la Justicia Federal y Nacional Penal, y elevarlas a los órganos competentes*”, entre otras.

Posteriormente, mediante el decreto nro. 257/2015 dictado por el anterior Presidente de la Nación a días de su asunción, se decidió suspender la implementación del nuevo Código Procesal y se sustituyó el art. 2 de la ley nro. 27.150 modificando el cronograma de implementación.

Mediante dicho acto, se estableció que el Código “*entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la CBCPPF, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura de la Nación*”. A la vez, el mentado decreto derogó variadas disposiciones en relación a la puesta en marcha del nuevo sistema plasmadas en las Leyes Orgánicas de Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente; tales como las que estipulaban su autarquía financiera.

Es decir que, la implementación del Código se ha visto comprometida durante gran parte de la anterior administración gubernamental, suspendiéndose la instauración del sistema acusatorio en todo el territorio nacional y supeditando la misma a la elaboración de un cronograma por parte de la CBCPPF en el marco de consultas previas. El proceso se reanudó luego de la aprobación de la citada ley nro. 27.482 sancionada el 6 de diciembre de 2018 -que introdujo diversas modificaciones a las leyes nro. 27.063, nro. 27.146 y nro. 27.150- y la publicación de un nuevo texto ordenado del Código de forma mediante el decreto presidencial nro. 118/2019 fechado el 7 de febrero de 2019.

b) Sobre el derecho a recurrir

b.1) Implementación territorial progresiva

Mediante el acta nro. 15 del 26 de marzo de 2019, la CBCPPF dispuso la implementación del CPPF con fecha 10 de junio de 2019 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Salta, la que también abarca a la justicia federal con asiento en la provincia de Jujuy. Así, a partir de junio del año 2019, el Código se encuentra funcionando en el seno del sistema federal de administración de

justicia de dichas provincias, en las que habitan 1.887.748 argentinos conforme el último estudio censal nacional del año 2010.

Seguidamente, y mediante la Resolución nro. 2/2019 de la CBCPPF de fecha 13 de noviembre de 2019, se resolvió iniciar el proceso de implementación territorial del Código Procesal Penal Federal para su aplicación integral en todas las causas que se inicien en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Mendoza -lo que incluye a la administración federal de justicia con sede en las provincias de San Juan y San Luis- y la de la Cámara Federal de Rosario -que ejerce alzada sobre los Juzgados federales sitios en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto; de la Provincia de Santa Fe y respecto de los Juzgados federales de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires-.

Cabe mencionar que estas jurisdicciones engloban un universo significativo en términos de población y flujo de casos. A los fines de ilustrar dicha dimensión, se destaca que la primera de ellas, que abarca tres provincias, cobija una población total de 2.852.294 habitantes según el último censo nacional, que data de diez años atrás¹. Por su parte, según datos oficiales publicados, se abordaron en toda la jurisdicción 17.015 causas penales al inicio del primer semestre de 2019 y 18.239 al finalizar el mismo año².

Por otro lado, sólo la provincia de Santa Fe tiene una población de 3.194.537 habitantes; siendo la tercera provincia más poblada del país, tras las provincias de Buenos Aires y Córdoba³. En relación al volumen de casos penales que adjudica dicho distrito federal, al inicio del primer semestre del año 2019 se registraron un total de 8743 entre primera y segunda instancia, y 9625 al cierre del mismo⁴.

En adición a lo dispuesto por la CBCPPF respecto de las jurisdicciones precedentemente mencionadas, también debe tenerse en cuenta que el

¹ Ver Censo Nacional 2010, disponible en <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoProvincia-3-999-50-000-2010>

² Datos respecto a la Jurisdicción Federal de Mendoza, que incluyen Juzgados de Primera Instancia de San Juan y San Luis, disponibles en: [https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/Archivos/Libros/Estadi_19/\(2019-1S\)%20Mendoza%20-Tr%C3%A1mite%20de%20Expedientes%20\(Resumen%20del%20per%C3%A1odo\).pdf](https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/Archivos/Libros/Estadi_19/(2019-1S)%20Mendoza%20-Tr%C3%A1mite%20de%20Expedientes%20(Resumen%20del%20per%C3%A1odo).pdf)

³ Ver Censo Nacional 2010, disponible en <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoProvincia-3-999-82-000-2010>

⁴ Datos respecto a la Jurisdicción Federal de Rosario disponibles en [https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/Archivos/Libros/Estadi_19/\(2019-1S\)%20Rosario%20-Tr%C3%A1mite%20de%20Expedientes%20\(Resumen%20del%20per%C3%A1odo\).pdf](https://old.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_estadisticas/Archivos/Libros/Estadi_19/(2019-1S)%20Rosario%20-Tr%C3%A1mite%20de%20Expedientes%20(Resumen%20del%20per%C3%A1odo).pdf)

Proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal” que cuenta con media sanción del Honorable Senado de la Nación y actualmente se encuentra bajo consideración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, prevé un plazo máximo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De sancionarse esa norma, se sumaría un nuevo distrito a la hoja de ruta ya trazada por la CBCPPF para la implementación del CPPF, el que abarca un universo territorial de 2.890.151 habitantes, y a la vez, una mucho mayor litigiosidad, volumen de casos y cantidad de agencias judiciales a readecuar su funcionamiento, por tratarse del sistema de justicia con sede en la capital de la República Argentina.

Así las cosas, la CBCPPF se encuentra trabajando tras su nueva composición -que data del 1 de julio de 2020- realizando las actividades necesarias de relevamiento y articulación interinstitucional a los fines de dotar a sus integrantes de toda la información necesaria para su determinación de las fechas en las que habrá de instaurarse el funcionamiento del CPPF en las jurisdicciones designadas mediante la resolución nro. 2/2019 de la CBCPPF. Asimismo, en el mediano plazo, se ha planificado un diagnóstico de las necesidades existentes en todo el territorio nacional que permita abordar un cronograma de implementación todavía más extensivo (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Tal como fuera plasmado en la Resolución 1/2020 de la CBCPPF publicada el 3 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial de la República Argentina “*a partir de la integración de sus nuevos miembros y autoridades el 1 de julio de 2020, esta CBCPPF comenzó a desarrollar las tareas de relevamiento, monitoreo y diagnóstico necesarias para la puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras organizacionales que demanda este nuevo sistema de enjuiciamiento penal*”.

En esta línea, se plasmó en la resolución aludida que esas acciones “*se vieron limitadas por la pandemia del coronavirus COVID-19, en el marco de las acciones llevadas adelante por los estados provinciales y el estado federal a los fines de abordar la emergencia sanitaria y reducir la circulación viral, lo que además tuvo impacto directo en el funcionamiento del sistema de administración de justicia*”.

No obstante, en ese contexto, y tal como se explicita en la citada resolución, la CBCPPF “*emprendió una serie de tareas de relevamiento en los distritos federales de Rosario y Mendoza, respectivamente, con el objetivo de construir un análisis situacional de cada territorio. En particular, se planifica realizar un estudio*

pormenorizado de la conflictividad de cada jurisdicción, analizando la cantidad de casos que ingresan, el tipo de salidas a las que arriban los mismos, qué tipo de fenómenos delictivos son abordados, la cantidad de personas detenidas, etc. Al mismo tiempo, se comenzó con un relevamiento de las necesidades de readecuación edilicia y equipamiento informático, así como también de los recursos humanos disponibles y faltantes y las necesidades de capacitación de los operadores, entre otros aspectos”.

Así, a fines del año 2020, la CBCPPF dio cuenta de que a ese momento, se habían evidenciado *“avances en materia de identificación de las necesidades particulares de cada jurisdicción en lo relativo a los requerimientos de adecuación edilicia, equipamiento informático, recursos humanos disponibles y necesidad de capacitaciones”* (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Frente a este cuadro, la CBCPPF decidió respecto de las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, *“continuar con las tareas de relevamiento y monitoreo en coordinación con los organismos, dependencias y tribunales involucrados a los efectos de propender a las adecuaciones necesarias y continuar con todos aquellos actos conducentes que permitan una pronta y eficaz implementación del CPPF”* (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Ahora bien, dicha determinación fue tomada además bajo la expresa tesitura de que el desarrollo de un diagnóstico acabado que defina las múltiples dimensiones a analizar para los procesos de implementación en las mentadas jurisdicciones permitirá elaborar un modelo o matriz que luego pueda ser aplicado al resto de los distritos de la Justicia Federal Penal a los fines de contar con la información necesaria para elaborar un cronograma de implementación territorial más extensivo, que permita dar mayor certeza a los operadores del sistema y a la ciudadanía en general respecto del prioritario proceso de implementación territorial del CPPF (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

En relación al proceso en ciernes respecto de los distritos federales que se condicen con las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Mendoza y Rosario, respectivamente, cabe rescatar que a la fecha la CBCPPF ha recabado y se encuentra analizando información tendiente a completar el proceso de relevamiento de las necesidades y particularidades de cada distrito de cara a la implementación del CPPF. En tal sentido, huelga destacar, que la transición al sistema acusatorio exige la adaptación, re-asignación y re-funcionalización de recursos humanos,

infraestructura edilicia y tecnológica así como la puesta en marcha de profundas reformas organizacionales y creación de nuevas estructuras, tales como las Oficinas Judiciales.

En línea con lo estipulado en la Resolución 1/2020, la CBCPPF ha recibido los aportes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (“AABE”), el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; estando pendiente la remisión de mayores precisiones por parte de la AABE en relación a la disponibilidad de inmuebles del Estado Nacional para la relocalización de agencias judiciales y de los Ministerios Públicos, así como del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros.

Por otro lado, paralelamente y tal como se encomendó en la Resolución 1/2020 de la CBCPPF, la CBCPPF efectuó *“una revisión y estudio sobre el proceso de puesta en marcha del sistema acusatorio de la jurisdicción del distrito federal Salta con el objetivo de identificar las fortalezas y posibilidades de mejora evidenciadas durante el proceso de implementación, así como propender al abordaje de aquellas cuestiones que pudieran estar pendientes de resolución. Ello, además, con el propósito de que dicho diagnóstico sirva como un insumo fundamental en el diseño del proceso de implementación en los distritos federales que comprenden la sección correspondiente a la competencia de la Cámara Federal de Mendoza y de la Cámara Federal de Rosario, respectivamente (...) así como también en las demás jurisdicciones en las que en lo sucesivo la CBCPPF resuelva avanzar con la implementación del CPPF”* (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Para dicho relevamiento la CBCPPF realizó *“un análisis cuantitativo y cualitativo del funcionamiento del sistema a un año y medio de su entrada en vigencia. En específico, se efectuaron entrevistas en profundidad con actores claves del sistema, así como también encuestas auto-administradas a todos los operadores del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa con la finalidad de sumar al análisis la importante visión de los propios trabajadores del sistema de justicia penal sobre el proceso. Además, se realizó un estudio sobre el tratamiento de los casos, las nuevas estructuras organizacionales, los flujos de trabajo de las instituciones y el sistema de audiencias orales”* (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Dicho diagnóstico se encuentra finalizado y fue compartido con las legisladoras y legisladores que integran la Comisión a fines del año 2020, tal como lo estipulaba la Resolución 1/2020 de la CBCPPF. Actualmente, la secretaría técnica de la

CBCPPF se encuentra trabajando en la elaboración de una versión pública de dicho trabajo para su acceso por parte de la ciudadanía y de los actores involucrados e interesados en el proceso en ciernes. De este modo, se pretende además cumplir con el mandato de la CBCPPF de garantizar el acceso de información pública respecto del proceso de implementación del CPPF, lo que a la vez, permite y estimula la necesaria participación ciudadana que debe acompañar tan importante cambio de paradigma.

Entre las conclusiones del diagnóstico efectuado se destacan, entre otras, la necesidad de afianzar y consolidar las estructuras organizacionales; la relevancia de la puesta en marcha de las Oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas; la valoración positiva por parte de integrantes del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal en cuanto al proceso de capacitación previo; la deuda existente en cuanto a la falta de un Colegio de Jueces como forma de organizar los órganos jurisdiccionales penales federales; los inconvenientes organizativos que presenta la existencia de competencias múltiples en los juzgados federales con asiento en el distrito, y la falta de puesta en funcionamiento de la oficina judicial para los Tribunales Orales Federales, sumándose a ello ciertas inconsistencias en el diseño normativo de dichas estructuras.

Así, a partir del trabajo realizado y del análisis de estas conclusiones, se espera dotar a los integrantes de la CBCPPF de la un diagnóstico certero, que posibilite, en caso de que así lo reputen conducente, abordar las posibles adaptaciones necesarias para garantizar una mayor eficacia para la implementación del sistema de forma consistente en las restantes jurisdicciones.

Finalmente, mediante la Resolución 1/2020 de la CBCPPF, el Cuerpo consideró que *“teniendo en consideración que a partir del 10 de junio de 2019 se dio inicio a un proceso de implementación territorial progresivo del CPPF que aspira a la instauración definitiva de dicho ordenamiento en todas jurisdicciones federales y nacionales, resulta necesario que los concursos para la designación de funcionarios, funcionarias, magistrados y magistradas realizados en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación se adapten a la evaluación de temas, casos y destrezas que guarden relación con los institutos propios de los sistemas de enjuiciamiento acusatorios, siendo de vital importancia para garantizar la presencia de las habilidades necesarias en los y las postulantes que le permitan cumplir con sus funciones de manera eficaz y eficiente”*. En ese mismo sentido, y consonantemente, la CBCPPF estimó que resultaba oportuno *“que*

los tribunales de dichos concursos se encuentren compuestos por magistrados, magistradas y juristas de reconocida experiencia y trayectoria en procesos penales adversariales” (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

b.2) Implementación parcial de normativa

El Código Procesal Penal Federal contiene diversas normas que refieren al derecho al recurso. Así, más allá de las menciones a dicho derecho en los principios fundamentales plasmados en la Primera Parte de su Libro I; el Libro III de la Segunda Parte del CPPF regula con detalle cómo se habrán de controlar y revisar las decisiones jurisdiccionales.

En relación puntualmente a las medidas dispuestas por la CBCPPF cabe rescatar que, mediante la Resolución nro. 2/2019 de la CBCPPF, se decidió la implementación de artículos del CPPF en todo el territorio nacional que versan sobre el paradigma de gestión del conflicto, los criterios de oportunidad, la conciliación, el asesoramiento técnico de víctimas, las medidas de coerción y las pautas para decidir respecto del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Asimismo, mediante la Resolución 2/2019 de la CBCPPF también se implementaron artículos del CPPF que se relacionan con el derecho amplio al recurso consagrado en el art. 8. 2 h) de la CADH. Mediante la citada normativa, se dio entonces inicio a un proceso de implementación normativa del CPPF, también progresivo.

En ese aspecto, la CBCPPF consideró en aquella ocasión que *“en lo que se refiere a los medios de impugnación también se impone la adopción de medidas para evitar situaciones de desigualdad ante la ley, puntualmente en relación con el goce de garantías constitucionales de central relevancia para los justiciables, en particular el derecho a contar con una revisión judicial amplia de toda decisión que imponga una sanción penal -doble conforme-”* (cfr. Resolución 2/2019 CBCPPF). Así, la CBCPPF meritó que, tras la implementación en Salta y Jujuy y al contarse en corto plazo con diversas causas ya finalizadas con sentencia definitiva, dicha situación imponía una intervención amplia y efectiva de la Cámara Federal de Casación Penal a un ritmo mayor del previsto originariamente.

Respecto de ello, la CBCPPF estimó que *“lo apuntado está generando situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el alcance de la protección que asegura una misma garantía constitucional respecto de procesos de similares características en trámite ante un mismo tribunal, debido a que el Código Procesal Penal Federal le otorga a ambas garantías un alcance significativamente más*

amplio, preciso y riguroso que el previsto en el ordenamiento” anterior (cfr. Resolución 2/2019 CBCPPF).

En función de lo antedicho, la CBCPPF decidió implementar a partir del tercer día hábil de la publicación de la citada resolución en todo el sistema de administración de justicia federal y nacional los artículos nro. 19 y 21 del CPPF. En particular, el art. 19 establece que *“la sentencia debe ser definitiva, absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan en la decisión”*.

Por su parte, y en lo que aquí más interesa, la CBCPPF implementó en los mismos términos el artículo 21 del CPPF que explicita que *“toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión”*.

En la misma inteligencia, y también a los fines de evitar situaciones palmarias de desigualdad ante la ley en relación con el alcance de protección que asegura una misma garantía constitucional respecto de procesos de similares características en trámite ante un mismo tribunal, la CBCPPF estimó en la misma resolución que correspondía también disponer la inmediata implementación de las disposiciones procesales contenidas en el art. 54 del CPPF que regulan las causales de intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, para todos los casos en trámite en la jurisdicción territorial que comprende su ámbito de actuación, que es único e indivisible y abarca todo el territorio nacional (cfr. Resolución 2/2019 CBCPPF).

Huelga destacar, que todas las implementaciones parciales del CPPF reseñadas, se encuentran ampliamente vigentes y su validez no se encuentra cuestionada. En este sentido, es relevante tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”), en el caso “Oliva”⁵, resuelto el 27 de agosto de 2020 en el que se discutía la vigencia de las normas sobre conciliación contenidas en el art. 34 del CPPF - también implementado en forma uniforme en todo el territorio nacional mediante la resolución nro. 2/2019 de la CBCPPF-, compartió e hizo suyos los fundamentos plasmados en su dictamen por el Procurador General de la Nación interino.

⁵ CSJN, “Oliva, Alejandro Miguel s/ incidente de recurso extraordinario”, CCC 9963/2015/TO1/2/1/RH1, rta. 27/8/2020.

Puntualmente, el Procurador General interino afirmó que las sentencias de la CSJN deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan. Así, coligió que las circunstancias que existían en el momento de la decisión que se cuestionaba en dicho caso cambiaron tras la Resolución nro. 2/2019 de la CBCPPF la cual implementó, a partir del tercer día hábil de la publicación de la norma, el artículo 34 del CPPF, en el ámbito de la justicia federal y nacional en lo penal.

Así, de la citada decisión del Máximo Tribunal de la República Argentina, se desprende que las implementaciones de normas -ya aprobadas en el seno del Congreso de la Nación- por parte de la CBCPPF, torna aplicables, a partir del tercer día hábil de la publicación de dicha decisión (B.O. 19/11/2019) y en el ámbito de la justicia federal y nacional en lo penal, las reglas allí especificadas. En efecto, el artículo 21 citado que consagra el derecho al recurso con amplias facultades de revisión se encuentra plenamente operativo y su aplicación es obligatoria para todos los jueces del sistema nacional y federal de administración de justicia penal.

A la postre, y tras su nueva composición, al dictar la resolución 1/2020, la CBCPPF estimó que *“la implementación parcial de normas efectuada mediante la Resolución 2/2019 de esta CBCPPF en todo el sistema de administración de justicia penal federal y nacional, versó sobre institutos fundamentales del sistema acusatorio como la gestión del conflicto, criterios de oportunidad, la conciliación, el asesoramiento técnico de víctimas, las medidas de coerción y las pautas para decidir respecto del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”*.

En este aspecto, evaluó que *“por la magnitud e importancia de los institutos implementados resulta imprescindible realizar un análisis acerca de su aplicación en cada una de las jurisdicciones del país con el objetivo de identificar las prácticas judiciales en torno a los mismos ya que éstos son desarrollados bajo el sistema mixto (Ley 23.984)”*. Por ello, la CBCPPF entendió *“vital realizar un estudio de su aplicación a los fines de evitar que en ese contexto se consoliden o generen interpretaciones de estos institutos contrarias a la esencia del nuevo paradigma acusatorio”* (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Por otro lado, frente al cuadro descripto, la CBCPPF reputó oportuno continuar con el proceso de implementación parcial con efecto *erga omnes* de distintos artículos previstos en el CPPF.

El criterio seleccionado por la CBCPPF para proseguir con dicho proceso fue el de la implementación de normas *“que confieran una mayor extensión en*

los derechos y garantías (...), pero cuya puesta en marcha no exija transformaciones sustanciales, sin la planificación necesaria; de flujos de trabajo, estructuras organizacionales ni suponga la interpretación de institutos nodales en el marco de agencias que aún no han atravesado las transformaciones respectivas para la implementación del sistema acusatorio que el CPPF delinea, y siempre que las normas a implementar no resulten incompatibles con el sistema del Código Procesal Penal (Ley 23.984)” (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Así, mediante la resolución nro. 1/2020, la Comisión decidió implementar los artículos 285, 286, 287 y 366 inciso “f” del Código Procesal Penal Federal para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional y para todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal.

Respecto del artículo 285 del CPPF, se explicitó que el mismo “*consagra el principio de publicidad del debate estableciendo reglas que otorgan una mayor transparencia a esta instancia central del proceso, permitiendo el control por parte de la sociedad en general de las resoluciones judiciales y del funcionamiento del sistema de administración de justicia” (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF). En este aspecto, la CBBCPF consideró que “resulta adecuada la implementación del artículo 285 en tanto la publicidad de los actos de gobierno se erige como una regla fundamental del sistema de justicia penal republicano, de base constitucional y fundado en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)” (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).*

En esa misma línea, se estimó “*oportuna la implementación del artículo 286 del CPPF que contiene reglas relativas al acceso del público a la sala de audiencias, en tanto sus disposiciones importan una flexibilización de las prohibiciones reguladas en el Código Procesal Penal (Ley 23.984) en relación a este derecho, cuyo ejercicio amplio propende a fomentar la función de control ciudadano sobre la tarea de los operadores judiciales en el marco de la audiencia, al tiempo que garantiza una mayor transparencia de conformidad con el principio de publicidad que debe regir a todos los poderes del Estado” (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).*

Por otra parte, se implementó “*el artículo 287 del CPPF que incorpora dentro de las reglas procesales relativas a la etapa de juicio el permiso a los medios de comunicación de acceder a la sala de audiencias en las mismas condiciones que el público en general (...) entendiendo que los medios de comunicación constituyen*

una herramienta de trascendental importancia para el fortalecimiento del principio de publicidad, siendo de este modo un factor democratizador del proceso penal” (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Asimismo, y en lo relativo al plano recursivo, la CBCPPF implementó mediante la Resolución 1/2020 el artículo 366 inciso f) del CPPF en todo el sistema de administración de justicia federal y nacional con la finalidad de seguir armonizando el ordenamiento jurídico procesal interno con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

El mentado artículo habilita la revisión de una sentencia firme en favor del condenado toda vez que se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual.

Dicha implementación otorgó una vía idónea que posibilita la implementación local de decisiones de instancias supranacionales, reconociendo así la extensión y alcances de la jurisdicción de los tribunales y órganos internacionales a los que la República Argentina ha decidido oportunamente someterse. A su vez, la puesta en marcha de esta norma en los distritos de la Justicia Federal Penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional en donde aún no rige el nuevo Código y en todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, se constituyó en un aporte a la resolución de los litigios radicados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos (cfr. Resolución 1/2020 CBCPPF).

Posteriormente, la Comisión decidió mediante la resolución nro. 1/2021 publicada el 10 de febrero de 2021 en el Boletín Oficial de la República Argentina *“reafirmar la vigencia de los artículos 366 y siguientes del Código en todas las jurisdicciones federales del territorio nacional en donde aún no rige el CPPF en consonancia con la implementación del artículo 21 que garantiza el derecho a recurrir una sanción penal ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión y del artículo 54 relativo a la competencia de los jueces con funciones de casación de revisar las sentencias firmes en los términos fijados por el artículo 366 y siguientes. Asimismo, en línea con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y atendiendo, entre otros, al principio pro homine”* (cfr. Resolución 1/2021 CBCPPF).

A la vez, advirtiendo que en el ordenamiento jurídico procesal penal que regía para aquellas agencias judiciales de la Justicia Nacional Penal que aún dependen del Estado nacional, subsistía una situación de regulación disímil en relación al alcance de los supuestos de revisión de sentencias condenatorias firmes, se reafirmó la vigencia de los artículos 366 y subsiguientes también en el seno de la Justicia Nacional Penal.

Así las cosas, la CBCPPF confirmó el vigor de los artículos 366, 367, 368, 369 y 370 del CPPF que regulan la revisión de sentencias firmes, en todo el sistema de administración de justicia que depende del Estado Nacional.

Por último, mediante la Resolución 1/2021 de la CBCPPF se dispuso la implementación del artículo 375 del CPPF, el que establece que sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. Es que, *“hasta la sanción del CPPF no existía una norma de naturaleza procedimental que de manera expresa estableciera el momento en que una sentencia condenatoria podía ejecutarse, situación que dio origen a interpretaciones jurisprudenciales disimiles”* (cfr. Resolución 1/2021 CBCPPF). Así, y en tanto *“la ausencia de criterios interpretativos uniformes originada en la falta de una norma concreta que otorgue una solución en la materia genera efectos diferenciales en las causas que tramitan en aquellos ámbitos de la justicia federal y nacional en donde aún no rige de manera íntegra el CPPF”*; se buscó mediante la aludida implementación parcial evitar que el sistema de progresividad territorial en la implementación del CPPF genere situaciones de desigualdad ante la ley (cfr. Resolución 1/2021 CBCPPF).

Finalmente, cabe rescatar que a la hora de tomar esta decisión se replicaron los criterios planteados en la Resolución 1/2020 en tanto la CBCPPF reputó que las normas aludidas no requieren para su implementación efectiva la puesta en funcionamiento de nuevas estructuras organizacionales que pudieran significar obstáculos en su inmediata operatividad y no resultan incompatibles con el sistema procesal establecido en el Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984) (cfr. Resolución CBCPPF 1/2021).

c) Consideraciones finales

En consonancia con lo peticionado, espero que la información aquí plasmada clarifique la información requerida al Estado Argentino por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al proceso de aprobación e implementación del CPPF, así como todas las acciones y planes desarrollados y en

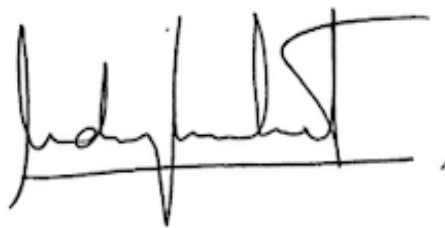
marcha por parte de la CBCPPF -plasmados en sus respectivas resoluciones-, a los fines de lograr la instauración del sistema acusatorio en el seno del sistema de administración federal de justicia penal.

Por otro lado, también fue menester de la presente clarificar los criterios adoptados por la CBCPPF en sus resoluciones a los fines de lograr que dicho proceso se realice de modo eficaz y consistente.

En esta línea, también se pretendió dar cuenta de la complejidad que la instauración de un nuevo paradigma implica; así como de los criterios adoptados por la CBCPPF para la implementación parcial de normas.

En efecto, la transición entre un modelo en donde prepondera el trámite, lo escrito y la concentración de funciones en la figura del juez –entre otras- a un nuevo paradigma acusatorio regido por los principios de igualdad, oralidad, contradicción, celeridad, inmediación y desformalización, con todas las implicancias que ello conlleva, es una tarea que demanda una labor sostenida y de articulación inter-institucional para ser efectiva.

Sin otro particular, quedando a su disposición ante cualquier consulta o clarificación que fuera necesaria, la saludo muy atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ignacio Mendizábal', with a horizontal line underneath.

Dr. Ignacio Mendizábal
Director - Secretaría Técnica
Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal